

Democracia Económica, Rentas Garantizadas y Derechos Humanos. Una Aproximación en Castilla-La Mancha

Economic Democracy, Guaranteed Rents and Human Rights. An Approach in Castilla-La Mancha

Roberto Moreno López
Beatriz Esteban Ramiro

Universidad de Castilla-La Mancha, España

Los umbrales de pobreza en la unión europea y especialmente en España aún distan mucho de ser adecuados a sociedades teóricamente desarrolladas y encajadas en sistemas de bienestar modernos. Buena parte de la población no tiene asegurados los derechos básicos para acceso a los recursos. Desempleados de larga duración e incluso trabajadores empobrecidos a pesar de estar en situación activa nos llevan a profundizar en las condiciones de la población y la violación de los derechos humanos más básicos en la España de hoy. El análisis de las propuestas de garantías de rentas o rentas, rentas de inserción, rentas básicas en los diferentes territorios nos acerca a una base legal y social que asegure las condiciones mínimas de desarrollo humano en nuestras regiones.

Descriptor: Renta garantizada; Garantía de rentas; Pobreza; Exclusión social.

The thresholds of poverty in the European Union and especially in Spain are still far from adequate to theoretically developed societies and embedded in modern welfare systems. A large part of the population does not have basic rights to access resources. Long-term unemployed and even impoverished workers, despite being in an active situation, lead us to deepen the conditions of the population and the violation of the most basic human rights in Spain today. The analysis of the proposals of income or rental guarantees, insertion income, basic income in the different territories brings us closer to a legal and social basis that ensures the minimum conditions of human development in our regions.

Keywords: Guaranteed income; Income guarantee; Poverty; Social exclusion.

Introducción

La situación actual de pobreza estructural que vive gran parte de la población mundial supone desde hace siglos motivo de reflexión y compromiso social del conjunto de las sociedades e individuos para con sus conciudadanos. La situación excepcional de crisis mundial acontecida durante la última década ha dejado en las sociedades más desarrolladas grandes bolsas de ciudadanos que antes de la crisis se encontraban en las llamadas clases medias -medias bajas y que como consecuencia de la crisis económica y bancaria han pasado a formar parte de las capas más vulnerables de las sociedades desarrolladas.

En el caso español y en especial el Castellano Manchego, por ser esta la comunidad que nos ocupa, los datos no son nada alentadores. Los tasas de desarrollo económico, la evaluación del empleo y del consiguiente paro, así como los datos de pobreza en los entornos familiares nos presentan una realidad alejada de los conceptos clásicos de derechos humanos y estado de bienestar.

La aparición en las últimas décadas de debates en torno a los conceptos Rentas básicas, rentas mínimas, rentas de inserción, rentas garantizadas como elementos de protección de derechos humanos en las sociedades actuales de forma que puedan asegurar los elementos más básicos de democracia económica y cobertura de necesidades familiares e individuales nos lleva a realizar

una aproximación analítica de la situación actual en nuestra región. Según Sanzo (2005) el sistema de rentas mínimas en España en la mayoría de los casos no son adecuadas para cubrir las necesidades más básicas de las personas. Una de las características más habituales en las rentas mínimas de inserción es que las prestaciones se establecen a un nivel muy bajo, hecho que se comparte con otras prestaciones de carácter asistencial (Rodríguez, 2013). Las diferencias entre comunidades autónomas son muy importantes y hay una relación inversa entre la tasa de pobreza y la tasa de cobertura de la prestación (Gutiérrez 2014). Además, son relevantes las disparidades que existen en cuanto a los requisitos de acceso y de duración de la prestación. (Ballester y Garriga, 2015)

Método

Aproximación a la situación en Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha representa la tercera autonomía más extensa de España y si lo analizamos por número de habitantes la novena con más de dos millones. Castilla-La Mancha representa una comunidad con una gran dispersión de su población repartida en 919 municipios y cinco provincias. El empobrecimiento de la sociedad no es sólo cuestión del desempleo, sino también de la precariedad laboral que se está extendiendo. Pero es importante resaltar que el deterioro de las condiciones de vida de las familias no se debe sólo a la situación del mercado de trabajo y de la economía en su conjunto, sino también a la manera en cómo se ha respondido y se está respondiendo a esta situación de crisis desde las instituciones y los poderes públicos.

La caída dramática de la renta media durante la crisis económica que emergió durante el 2008 en nuestro país resultó aún más acusada en Castilla-La Mancha. Para lograr mayor acercamiento a la realidad social y el impacto de la crisis en las familias nos fijamos en un indicador en el que se refleja la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE). Según los datos extraídos del INE la población castellanomanchega que se encontraba en riesgo de pobreza y exclusión social durante el 2016 ascendía hasta un 37,9 %, superando en 10 puntos porcentuales la media del conjunto nacional (27,9%). Como podemos ver en la figura 1 con el 37,9% de indicador AROPE Castilla-La Mancha se consolida como la tercera comunidad autónoma con la tasa más alta.

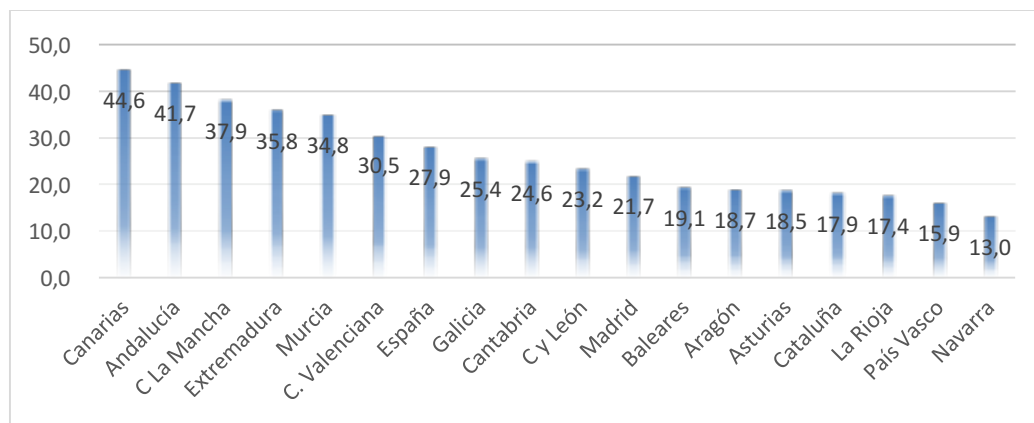


Figura 1. Indicador AROPE de pobreza y/o exclusión social en 2016 por Comunidades Autónomas

Fuente: INE. Encuesta de Condiciones de Vida.

Para la infancia y adolescencia desarrollarse en familias pobres supone un riesgo elevado de exclusión social, cuyos efectos perduran en el tiempo. Además, criarse en un hogar pobre eleva

las posibilidades de pobreza durante la vida adulta (Bradbury, Jenkins, y Micklewright, 2001). Los datos referidos a grupos de edad indican que el número de menores de 16 años de la región que se encontraban en riesgo de pobreza y exclusión.

Como podemos ver en la figura 2 y a pesar de la recuperación económica durante el 2016 el 7,6% de la población de Castilla-La Mancha vivía en situación de Privación Material Severa. Estos datos representan la tercera posición más alta respecto a las comunidades autónomas y casi 2 puntos por encima de la población nacional. Los datos presentan una realidad donde aproximadamente 155.000 castellano manchegos vivían en situación de Privación Material Severa en la región durante el 2016.

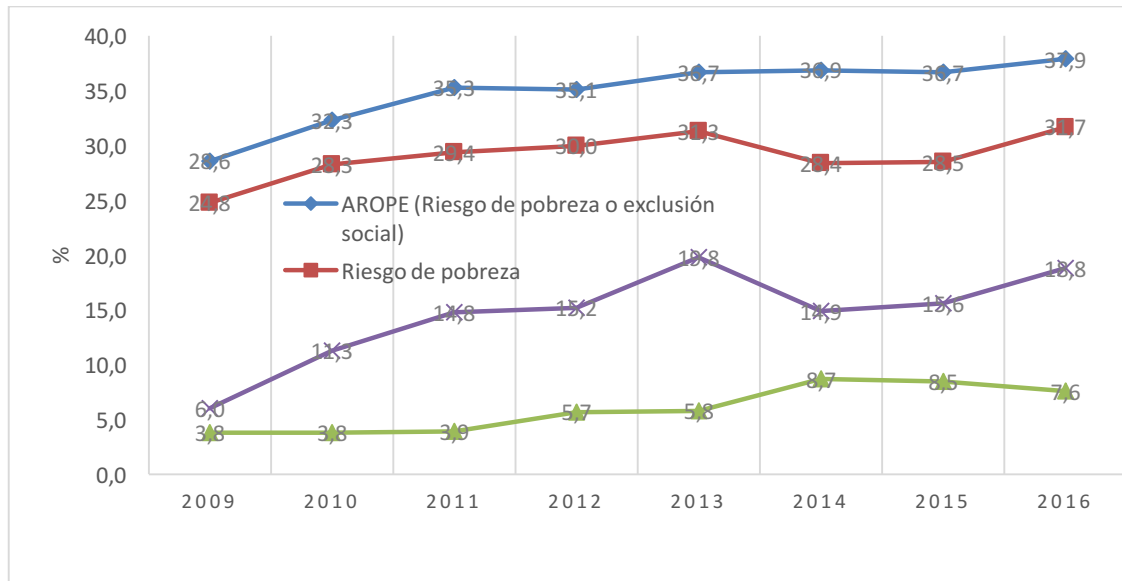


Figura 2. Evolución del riesgo de pobreza o exclusión de Castilla-La Mancha

Fuente: INE. Encuesta de Condiciones de Vida.

Actualidad de la cobertura de protección en CLM

Uno de los problemas fundamentales de los años de crisis económica es la ausencia de respuestas eficaces de los poderes públicos para paliar la caída de las rentas y el aumento de necesidades. Al tiempo que crecían las situaciones de pobreza se reducían los recursos y programas dirigidos a atender las situaciones de necesidad, entre otros motivos, por la intensa ejecución de un proceso de consolidación fiscal. Un ejemplo de ello es el desmantelamiento de los sistemas de protección social durante los años más duros de la coyuntura económica.

El gasto social (educación, sanidad y bienestar social), tal y como se puede observar en la figura 3, entre los años 2010 y 2014 se redujo un -16,8%. A partir de entonces el presupuesto de gasto social ha marcado tasas de variación relativa positiva, pero sin alcanzar los niveles previos a la crisis económica. Como podemos ver en la figura 3 la caída de la inversión en materia de gasto social durante el periodo 2011 a 2015 ha sido importante con una reducción de casi de 1.500 millones.

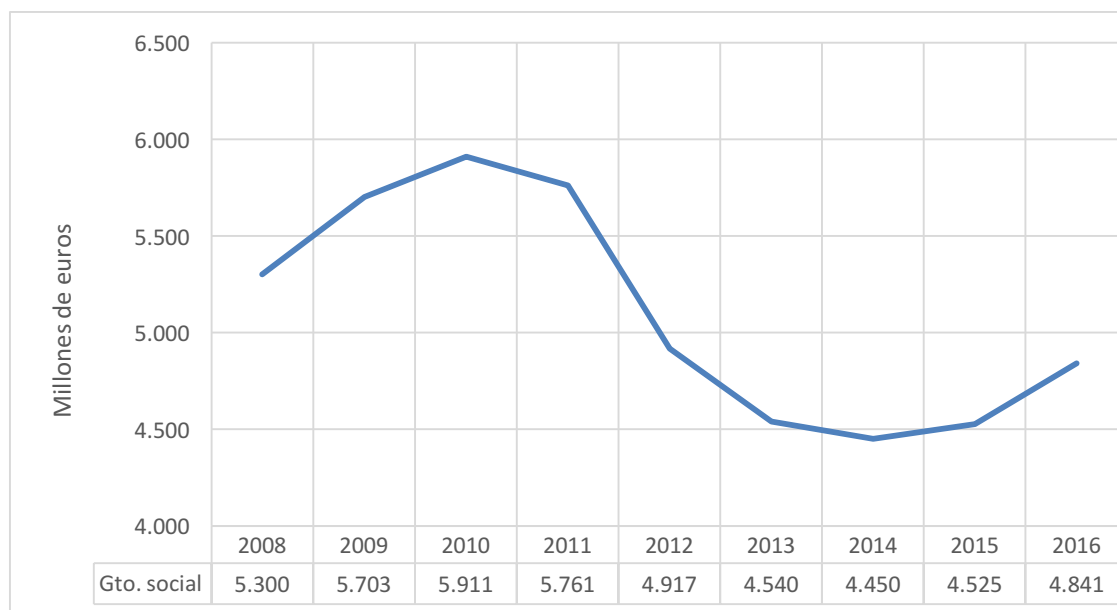


Figura 3. Evolución gasto social presupuestado en Castilla-La Mancha
Fuente: Elaboración propia, datos presupuestos Castilla-La Mancha varios años.

Conclusiones

Se constata la necesidad de la puesta en marcha de un sistema de protección transversal del conjunto de las familias e individuos castellanomanchegos y que permita reducir las actuales tasas de pobreza y permitan el acceso a los derechos fundamentales de la población. En las modernas democracias liberales el orden político está legitimado por las decisiones de sus ciudadanos libres y responsables. La ciudadanía es, principalmente, un estatus conformado por el acceso a los recursos básicos para el ejercicio de derechos y deberes. La no discriminación para el acceso a los recursos básicos para el desarrollo constituye la condición necesaria y suficiente de la ciudadanía. En el caso contrario los titulares de derechos permanecen en una situación de precariedad expresada está como déficit de ciudadanía. (Moreno, 2003).

Referencias

- Ballester, R., y Garriga, A. (2015). De la reforma de la Renta Mínima de Inserción catalana a la Renta Garantizada de Ciudadanía: ¿un cambio de paradigma? *Revista de Economía Crítica*, 20, 23-43.
- Gutierrez, E. (2014). Nova pobresa i renda mínima d'insercio. *Dossier Catalunya Social*, 35.
- Moreno, L. (2003). Ciudadanía, desigualdad social y Estado del bienestar. *Documento de trabajo*, 3, 08.
- Rodríguez, G. (2013). *Valoración de la implementación de la Recomendación sobre Inclusion Activa de la Comisión Europea. Un informe sobre políticas nacionales-España*. European Commission.
- Sanzo, L. (2005). La introducción de la renta básica en España. *Cuadernos de Relaciones Laborales*, 23(2), 123-149.